

**EL PERSONAL POLÍTICO DEL PRIMER FRANQUISMO EN CANTABRIA.
DE LA REINSTITAURACIÓN DE LAS VIEJAS ÉLITES
AL ASENTAMIENTO DEL PODER FALANGISTA (1937-1951)**

Julián Sanz Hoya
Universidad de Cantabria

Durante la pasada década hemos presenciado un amplio desarrollo de los estudios de historia local y regional sobre instituciones y personal político, en especial centrados en el primer franquismo, que están permitiendo un mejor conocimiento de las bases sociales e institucionales sobre las que se sostenía la dictadura, así como sobre los mecanismos de funcionamiento y articulación del Estado en cada realidad social, los modos de control social y la interacción entre sociedad e instituciones¹. No debemos olvidar que los ayuntamientos constituían – especialmente en los municipios pequeños y medianos – el enlace más directo entre el Estado franquista y los ciudadanos, la representación más cercana del régimen y el punto en torno al cual confluían los apoyos sociales de la dictadura. Este análisis permite también comprobar aspectos como la heterogeneidad de orígenes políticos de los apoyos del franquismo, la pervivencia o no de las viejas lealtades políticas e ideológicas, la continuidad o renovación del personal político respecto de etapas anteriores, así como su relación con las élites socio-económicas locales, etc. El desarrollo de este tipo de estudios permitirá asimismo proponer conclusiones de validez general a partir de la comparación de los diferentes casos, planteando tanto las características comunes al funcionamiento y apoyos del régimen en el conjunto nacional como los aspectos específicos de los diferentes territorios. En esta línea de trabajo pretendemos exponer algunos resultados de nuestra investigación sobre el primer franquismo en Cantabria, en concreto aquellos referidos al reparto del poder político regional y local, así como la caracterización de los cuadros políticos que se hicieron cargo del mismo².

¹ Sobre la necesidad de estudiar los cuadros políticos de las clases intermedias e inferiores del franquismo véase Glicerio SÁNCHEZ RECIO, *Los cuadros políticos intermedios del régimen franquista, 1936-1959. Diversidad de orígenes e identidad de intereses*. Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1996, pp. 8-9.

² Esta comunicación presenta algunas de las conclusiones obtenidas en nuestra tesis doctoral *El primer franquismo en Cantabria. Falange, instituciones y personal político (1937-1951)*, defendida en la Universidad de Cantabria en mayo de 2.003, siendo deudora asimismo de algunas sugerencias aportadas por los componentes del tribunal de la misma, drs. Julio Aróstegui, Conxita Mir, Ismael Saz, Aurora Garrido y Ángela Cenarro.

1. El proyecto restaurador del franquismo: la vuelta al poder de las viejas élites durante la guerra civil.

La experiencia democrática de la Segunda República y las reformas puestas en marcha en terrenos como la secularización, la legislación laboral y la reforma agraria, fueron contemplados como una amenaza a su poder tradicional por parte de las élites sociales dominantes (terratenientes, burguesía agraria e industrial, Iglesia). Tales élites y los sectores sociales y políticos que las apoyaban pusieron en marcha una ofensiva destinada a frenar en todos los frentes tales reformas, y en última instancia recurrieron al intento golpista de julio de 1936 para acabar definitivamente con la democracia republicana. No es éste el lugar para referirnos a la dinámica política y social de la etapa republicana en Cantabria, baste decir que el quinquenio iniciado en 1931 presenció en la región una movilización política sin precedentes de la población, una importante conflictividad en diferentes ámbitos (el campesino, el obrero, el religioso y el puramente político) y una creciente polarización de la ciudadanía. En el campo de la derecha fueron dos las opciones políticas con un mayor protagonismo y un evidente éxito en la movilización de los sectores conservadores y católicos, la Agrupación Regional Independiente (ARI) y Acción Popular. La ofensiva antirreformista del primer bienio estuvo canalizada en buena medida por ARI, una formación controlada por los alfonsinos de Renovación Española y en la que tenían especial peso los principales miembros de la burguesía regional (destacadamente los Quijano), mientras que tras su formación en 1934 Acción Popular se convirtió en la fuerza más pujante de la derecha, con el apoyo de la clase media conservadora y gran número de personas de todos los grupos sociales. Junto a estas organizaciones tuvieron también presencia la revitalizada Comunión Tradicionalista, volcada desde 1934 en la organización del Requeté, y Falange Española, con una militancia relativamente reducida (aunque muy superior a la existente en otras provincias) pero muy activa³.

³ Sobre estos aspectos véase nuestro trabajo de investigación de doctorado *Las derechas en Cantabria durante la Segunda República (1931-1936). Organizaciones y partidos políticos*. Universidad de Cantabria, 2000. Al respecto también pueden verse nuestras comunicaciones “El catolicismo accidentalista en Cantabria durante la Segunda República. Acción Popular, 1934-1936”, en Antonio MORALES MOYA (coord.), *Las Claves de la España del Siglo XX. Ideologías y movimientos políticos*. Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2001, pp. 335-352, y “<Una fuerza de choque al servicio de la Iglesia>. La Acción Católica montañesa frente a la II República, 1931-1936”, en *Iglesia y Religiosidad en España. Historia y Archivos. Actas de las V Jornadas*

En este contexto, tanto la sublevación de julio de 1936 (fracasada en Cantabria) como la progresiva configuración del aparato de poder en la zona rebelde son exponentes de un proyecto “restaurador”, de un intento de restablecer y asegurar firmemente - brutalmente - el orden socio-económico tradicional, desde concepciones muy conservadoras y con un notable protagonismo de los sectores monárquicos alfonsinos. Esto se tradujo en la formación de nuevos poderes locales con un fuerte peso de las oligarquías tradicionales y de los prohombres de la derecha conservadora de cada zona. Un buen exponente de esta tendencia está en el informe titulado “Apuntes sobre Santander”, fechado en San Sebastián en marzo de 1937 y cuyo anónimo autor era sin duda alguien ligado a los círculos monárquicos de Santander⁴. Estos apuntes, escritos a instancia de las autoridades militares en previsión de una próxima toma de la provincia montañesa, desgranán con cierto detalle toda una serie de recomendaciones y medidas a tomar tras la ocupación, incluyendo – y esto es lo que aquí nos interesa – una amplia lista de personas recomendadas para ocupar los diversos cargos políticos, incluyendo las alcaldías de los diferentes municipios cántabros. Pese a las pretensiones de asepsia política del lenguaje empleado (incluyendo el hecho de que no se señale en ningún caso la procedencia política de los recomendados) lo más interesante del informe es la significación política y social de las personas propuestas. Entre quienes debían ocupar los principales cargos provinciales hay un neto predominio de elementos monárquicos procedentes de la alfonsina Agrupación Regional Independiente o que habían ocupado cargos durante la dictadura primorriverista (y a veces anteriormente). Para regir los ayuntamientos son propuestos también conocidos monárquicos (cuando no se incluye la recomendación de consultar a los notables alfonsinos de la zona), así como una decena de dirigentes locales de Acción Popular (algo explicable por la hegemonía de este partido en determinados municipios), mientras que llama la atención la escasa presencia de falangistas y la casi total exclusión de los tradicionalistas. Asimismo es evidente el carácter de restauración del orden social que se pretende, visible en la propuesta de destacadas personalidades de la burguesía regional para cargos de relieve (los hermanos Miguel y José Antonio Quijano, José M^a Calderón, José M^a Agüero, Eduardo González-Camino, Luis Catalán,...) y de caciques, ex-

de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos. Guadalajara, ANABAD Castilla-La Mancha/Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2002, vol. I, pp. 253-269.

⁴ Hemos localizado este informe tanto en el Archivo de Pedro Sáinz Rodríguez, depositado en la Fundación Universitaria Española (APSR, caja 52, carpeta 5) como en el Archivo Militar de Ávila (Zona Nacional. Ejército del Norte, leg. 16, carpeta 37).

alcaldes o personas próximas a las élites económicas al frente de los ayuntamientos. Con estos datos resultan más que evidentes los objetivos políticos y sociales que guiaban a las autoridades de la pretenciosamente denominada *Nueva España*, que más adelante tuvieron su plasmación en el reparto de los poderes locales a partir de agosto de 1937, en el que buen número de las personas recomendadas en este informe tuvo un notable protagonismo.

De acuerdo con lo que venimos diciendo, la primera Comisión Gestora de la Diputación Provincial, nombrada en septiembre de 1937, se caracterizó por una composición marcadamente conservadora. A su frente se colocó Eduardo González-Camino, falangista (había sido jefe provincial de FE-JONS antes de la unificación), industrial ganadero y destacado miembro de la élite económica regional, cuyo nombre ya aparecía en los “Apuntes sobre Santander”⁵. Como gestores fueron nombrados Ángel Jado Canales, Leopoldo Bárcena y Díaz de la Guerra, José Argumosa Argumosa y José Antonio Quijano de la Colina (que renunció al cargo y fue sustituido por Sandalio López Díaz), siendo todos ellos conocidos representantes de los sectores más conservadores de la burguesía montañesa y cuya carrera política se había iniciado por lo general en la etapa restauracionista⁶. Cuando en febrero de 1939 se procedió a una renovación parcial de la Gestora, fue nombrado presidente un miembro de la poderosa familia Quijano, Miguel Quijano de la Colina, un abogado militante de FET-JONS y antiguo directivo de la Agrupación Regional Independiente⁷. Como vicepresidente fue designado Francisco Nárdiz Pombo, un abogado falangista, antiguo presidente de la Federación de Estudiantes Católicos de Santander y perteneciente a una conocida familia burguesa santanderina. En la práctica la Gestora era más de lo mismo, con la

⁵ González-Camino había sido directivo de organizaciones agrarias como la Asociación Provincial de Ganaderos y el Sindicato de Productores de Leche, perteneciendo a una de las familias más pudientes de la burguesía regional, con destacada presencia en la vida empresarial, cultural y política de la provincia. Su nombramiento, más que por su militancia política (que en cualquier caso pudo favorecerle) se debió a su posición social y al haber estado en contacto con las autoridades de la zona rebelde.

⁶ Por señalar un caso, el vicepresidente Ángel Jado era un adinerado abogado y hombre de negocios, miembro de los consejos de administración del Banco de Santander y de otras empresas, muy vinculado a Acción Católica y ex-concejal de Santander por el Centro Católico Montañés, militando posteriormente en la Unión Patriótica.

⁷ Los datos sobre la formación de la Gestora y sus miembros en AGA, Gobernación, caja 2602, y en *Alerta*, 18-II-1939. Al parecer el nuevo presidente fue recomendado al gobernador civil por su antecesor González-Camino, amigo personal suyo. De acuerdo con la tendencia política imperante, Quijano se había apresurado a vestirse la camisa azul y unirse al partido unificado, siendo además delegado especial del jefe provincial para Recaudación y jefe de distrito de FET-JONS; sin embargo su fascistización era epidérmica y nunca abandonó sus convicciones monárquicas y conservadoras.

incorporación de varios militantes del partido integrantes de la burguesía regional y muy conservadores⁸.

Algo similar ocurrió en el Ayuntamiento de Santander, donde la primera gestora quedó presidida por Emilio Pino Patiño, un monárquico de la Agrupación Regional Independiente y que precisamente había sido recomendado para este cargo en los “Apuntes sobre Santander”⁹. La reducida corporación, de siete miembros, se definía políticamente por dos rasgos principales: la importante presencia de ex-concejales de la Dictadura (con el alcalde, cuatro) y un cierto carácter de coalición de las diferentes fuerzas adictas al Movimiento, al incluir a dos alfonsinos de ARI, dos falangistas, un cedista y un carlista, estando formada sobre todo por conocidas personalidades de la clase media-alta (Aurelio Gómez Lambert, Alberto Dorao, Ángel Portales, Roberto Zatarain, Gonzalo Santamaría y Arturo Arredondo Pérez). Cuando en octubre de 1939 el gobernador civil, el monárquico marqués de la Eliseda, procedió a completar la gestora, se mantuvo entre sus componentes el tono conservador, con una mayoría de concejales de escaso relieve político y pertenecientes a las clases medias y altas, entrando en el consistorio varios falangistas y excombatientes, entre los que destacaba la presencia de varios hijos de la burguesía regional¹⁰.

Si nos fijamos en el conjunto de los municipios de la región, los datos con que contamos confirman ampliamente la vuelta al poder de alcaldes del bienio radical-cedista o de

⁸ Continuaban en la misma Jado, Bárcena, Argumosa y López, y se incorporaba también el acomodado industrial y comerciante santanés Agustín de la Fragua, militante de FET-JONS y antiguo cabo del Somatén.

⁹ Emilio Pino era un contratista de obras casado con Rosario Castanedo Polanco (lo que le convertía en yerno del constructor Castanedo y pariente de los Polanco, conocida familia de la burguesía local). Durante la Dictadura de Primo de Rivera había sido teniente de alcalde, formando parte de la Unión Patriótica. En el período republicano estuvo afiliado a la Agrupación Regional Independiente e igualmente militó algún tiempo en Falange Española, de la que fue expulsado por su inclinación ultraconservadora. En los meses previos a la sublevación de julio de 1936 tuvo un activo papel como intermediario entre las fuerzas civiles que apoyaban el golpe y los militares, fracasando en sus repetidos intentos de convencer al coronel Pérez García-Argüelles de que se declarase el estado de guerra y se uniera a la rebelión. Debido a su trayectoria política, Pino estaba bien relacionado con los círculos monárquicos y burgueses santanderinos, incluyendo a personalidades tan influyentes como Pedro Sáinz Rodríguez (poco después nombrado ministro de Educación), la Marquesa de Pelayo, los poderosos hermanos Quijano o el ex-diputado cedista Eduardo Pérez del Molino (de quien era primo político).

¹⁰ Como señalaba años después uno de sus miembros, el nuevo ayuntamiento “era una selección de antiguos combatientes, de comerciantes, industriales, abogados, catedráticos, ingenieros, peritos mercantiles, gerentes de empresas, rentistas, la mayoría de ellos sin haber militado en Partidos políticos, pero todos adictos al Movimiento” (Fermín SÁNCHEZ GONZÁLEZ, *La vida en Santander*. Santander, Aldus, 1949, vol. IV, pp. 43-44; sus antecedentes políticos en AGA, Gobernación, caja 2623). Eran destacados miembros de la burguesía santanderina José M^a Quijano Secades (hijo del ex-dirigente de ARI Ramón Quijano de la Colina), el falangista José Antonio Mazarrasa Quijano (primo del anterior) y Pedro Escalante (nieto del escritor Amós de Escalante e hijo de Luis de Escalante, también ligado familiarmente a los Quijano y dirigente de ARI), que llegó a ser presidente de la Diputación Provincial en los años sesenta. Sólo entraban en el ayuntamiento tres *camisas viejas*.

la Dictadura, combinada con el recurso a los dirigentes de las organizaciones derechistas locales, fundamentalmente de Acción Popular¹¹. Sobre un conjunto de 181 alcaldes, sabemos que al menos 70 contaban con una trayectoria política previa (sea como cargos municipales o bien como dirigentes y afiliados a partidos). Trece habían ocupado ya la alcaldía durante la Dictadura de Primo de Rivera, a los que hay que sumar un mínimo de siete que habían sido concejales durante ese período, mientras que otros catorce habían presidido sus ayuntamientos durante la República y al menos once habían sido concejales entonces (caso del reinosano Adolfo López Lantarón que ya había sido gestor tras Octubre de 1934). En cuanto a los partidos políticos de procedencia hay una clara supremacía de Acción Popular, a la que habían pertenecido 27 alcaldes, frente a ocho de la Agrupación Regional Independiente y cuatro de Falange, además de un republicano conservador y un federal, en cambio no hemos localizado ningún alcalde tradicionalista¹². Entre los ayuntamientos afectados por esta reposición de los antiguos alcaldes o dirigentes derechistas estaban algunos de los más importantes de la provincia, caso de Torrelavega, donde el primer alcalde franquista fue el cedista Julián Urbina Carrera, principal dirigente de la derecha local durante la República, y posteriormente lo fueron los también derechistas Alejo Peña y Pedro José de Cos¹³. En Laredo se suceden varios alcaldes de antecedentes bien definidos: el falangista Pedro Salcines, el ex-alcalde de la Dictadura Tomás Cañarte y el ex-presidente local de Acción Popular Ángel Senderos. En Santoña igualmente encontramos como alcalde al antiguo dirigente de Acción Popular Juan José Fernández Bustillo. En Ramales ocupó la alcaldía de manera casi ininterrumpida desde 1937 el contratista de obras Julián Fuentecilla, concejal en la Dictadura, luego militante de Acción Popular y desde julio de 1936 afiliado a Falange.

En suma, nos encontramos con un panorama similar al descrito por buen número de

¹¹ Algo similar ya fue señalado por Jesús GUTIÉRREZ FLORES para la comarca de Campoo, donde hasta el fin de la guerra la tónica general fue la continuidad, siendo repuestos en sus cargos los concejales destituidos por el Frente Popular y volviendo a su posición dominante los notables locales derechistas (*Veinte años de conflicto y violencia como modo de relación en 313 pueblos de Cantabria, Burgos y Palencia, 1930-1950*. Tesis doctoral inédita, Universidad de Cantabria, 1998, p. 176). En esta comarca tuvieron fuerte presencia los alcaldes procedentes de Acción Popular, en muchos casos con experiencia municipal previa.

¹² En cualquier caso es preciso tener en cuenta la distorsión introducida por las fuentes utilizadas, por lo que cabe pensar que el número de alcaldes provenientes de ARI (organización sobre cuyos dirigentes locales tenemos escasos datos) fuese bastante superior y que fueran igualmente más los que habían militado en el republicanismo maurista o se habían presentado como “republicanos independientes”.

¹³ Urbina era un abogado y comerciante acomodado, hijo de un ex-alcalde conservador de la monarquía, que había dirigido en Torrelavega primero la Agrupación Regional Independiente y luego en Acción Popular (partido cuyos antiguos dirigentes y militantes tuvieron durante el primer franquismo una destacada presencia en

investigaciones para otras zonas de España, donde lo habitual fue la vuelta de las élites tradicionales y el protagonismo de los líderes y cuadros de los partidos derechistas del período republicano¹⁴. En cambio la representación de la antigua Falange Española fue bastante limitada, pues aparte de Salcines en Laredo sólo aparecen *camisas viejas* al frente de las gestoras de Bárcena de Pie de Concha (Justo de las Cuevas Rodríguez, recomendado en marzo de 1937, jefe local de la Unión Patriótica y concejal en la Dictadura), Guriezo y Cabuérniga. Por otro lado, a pesar de las normas dictadas sobre la obligación de contar con el partido en la provisión de cargos y de que fueron nombrados buen número de jefes locales y militantes de FET-JONS como alcaldes y concejales, el hecho es que muchas veces se trataba de políticos procedentes de la derecha tradicional, no de falangistas, lo que originó choques entre el gobernador civil monárquico Eliseda y la jefatura provincial de Falange¹⁵.

Desde el punto de vista social, al observar las profesiones de los componentes de las gestoras encontramos un claro predominio de los agricultores y ganaderos (35 gestores y 2 alcaldes), seguidos de los comerciantes e industriales (15 gestores y 2 alcaldes), los propietarios (11 gestores y 2 alcaldes), los obreros y artesanos (10 gestores: mecánicos, canteros, obreros fabriles, carpinteros), los empleados (6 gestores), los profesionales liberales (3 gestores y 3 alcaldes: un médico, un abogado y un maestro nacional) y otros (un estudiante,

el ayuntamiento). Pedro José de Cos Pérez, que llegó a la alcaldía siendo jefe local de FET-JONS, era abogado, directivo del sindicalismo católico, antiguo miembro de la Unión Patriótica, y dirigente local de ARI en 1935.

¹⁴ Entre otros Ángela CENARRO LAGUNAS, *Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón, 1936-1975*. Zaragoza, Prensas Universitarias, 1997, pp. 142-143 y 159; Daniel SANZ ALBEROLA, *La implantación del franquismo en Alicante. El papel del Gobierno Civil (1939-1946)*. Alicante, Universidad, 1999, p. 86 y ss.; M^a Jesús SOUTO BLANCO, *Los apoyos al régimen franquista en la provincia de Lugo (1936-1940). La corrupción y la lucha por el poder*. Sada (La Coruña), Ediciós do Castro, 1999, pp. 137-141; Rafael VALLS, *La Derecha Regional Valenciana. El catolicismo político valenciano (1930-1936)*. Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1992, pp. 248-253; Antonio CALZADO y Ricardo Camilo TORRES, “La formación de un poder omnímodo. La Falange en la Ribera Baixa”, en Javier TUSELL y otros (eds.), *El régimen de Franco (1936-1975)*. Madrid, UNED, 1993, vol. I, pp. 29-40; Emilio GRANDÍO SEOANE, “El primer personal político del franquismo en la provincia de La Coruña. Cambio y continuidad de las elites políticas municipales durante la guerra civil en la retaguardia nacional”, en Javier TUSELL, *El régimen de Franco*, vol. I, pp. 69-87; Ana Rosa FRÍAS RUBIO, “Una aproximación al análisis del personal político y del Movimiento Nacional en la provincia de Soria”, en Javier TUSELL, Julio GIL PECHARROMÁN y Feliciano MONTERO (coords.), *Estudios sobre la derecha española contemporánea*. Madrid, UNED, 1993, pp. 643-654.

¹⁵ En concreto el jefe provincial Manuel Motero Valle se quejó a la Delegación Nacional de Provincias de que el gobernador no contaba con el partido para efectuar los nombramientos. La respuesta de Eliseda a las protestas de Motero nos informa de que hasta mayo de 1939 el gobernador había renovado 30 gestoras, y en 17 de ellas había nombrado alcalde al jefe local de FET-JONS o bien a alguien recomendado por el partido. Sin embargo entre esas gestoras sólo localizamos dos *camisas viejas* como alcaldes, mientras que aparecen varios ex-alcaldes de la Dictadura y elementos procedentes de los partidos derechistas (ARI y Acción Popular), siendo casos especialmente significativos de la invasión derechista de FET-JONS los de Torrelavega, Los Corrales de Buena, Penagos y Comillas (la documentación al respecto en AGA, Gobernación, caja 2602).

un pescador, un marinero)¹⁶. El mayor número de agricultores y ganaderos resulta lógico dado el carácter rural y agropecuario de la mayor parte de los municipios (aunque nos informa escasamente sobre su condición económico-social), mientras que resulta clara la elevada representación de los propietarios. Por lo demás sólo es posible señalar la importante presencia de comerciantes e industriales entre el primer personal del régimen, así como de algunos trabajadores manuales.

2. La ofensiva falangista de los primeros cuarenta y la consolidación del poder del partido:

El final de la guerra civil dio paso a un creciente proceso de *fascistización* del régimen franquista, con un evidente esfuerzo falangista por hacerse con todo el poder – o al menos con una hegemonía clara – en el seno de la dictadura. A esta ofensiva general se unió en el caso de Cantabria la llegada a la Jefatura Provincial de FET-JONS del enérgico Carlos Ruiz García y su posterior nombramiento como gobernador civil en diciembre de 1939, con lo que el principal centro de poder de la provincia quedaba en manos del partido. Ruiz García no tardó en dar muestras de su intención de colocar las estructuras de poder locales bajo control falangista y desde el comienzo de su mandato procedió a numerosas renovaciones de gestoras municipales, sustituyendo ayuntamientos controlados por elementos monárquicos o de la derecha tradicional y dando entrada en los mismos a hombres de la confianza del partido, primando especialmente a la vieja guardia y los excombatientes. Durante su mandato se renovaron al menos la mitad (51) de las gestoras municipales de la región, incluyendo las de municipios de la importancia de Torrelavega, Reinosa, Los Corrales de Buelna, El Astillero, Santoña y Camargo. Igualmente trató de sustituir la gestora de la capital, sustituyendo al monárquico Emilio Pino por el *camisa vieja* Germán Castillo Merino, sin éxito¹⁷.

La línea política de Ruiz García fue continuada en líneas generales por su sucesor como gobernador civil y jefe provincial de FET-JONS desde junio de 1941, el también

¹⁶ No están incluidos los gestores de Santander y de Torrelavega, que no aparecen en los informes. Si elaboramos los porcentajes obtenemos, incluyendo a los alcaldes, un 40,2% de agricultores, un 18,4% de comerciantes e industriales, un 14,1% de propietarios, un 10,8% de obreros y artesanos, un 6,5% de empleados y otro tanto de profesionales liberales.

¹⁷ Referencias a la intención de sustituir la Gestora santanderina en AGA, DNP, caja 10, expte. 21. Sobre su política de renovación de gestoras pueden verse datos en AGA, DNP, caja 10; AGA, Gobernación, caja 2623; prensa; así como Fermín SÁNCHEZ GONZÁLEZ, *La vida en Santander*, IV, p. 53.

camisa vieja Tomás Romojaro Sánchez. Recién llegado al cargo propuso una completa renovación de la Gestora de la Diputación Provincial en sentido francamente falangista, en la que los destacados hombres de la vieja guardia José Porres y Manuel Yllera debían hacerse cargo respectivamente de la presidencia y la vicepresidencia. Aunque esta propuesta no pudo llevarse a cabo, a principios de 1942 consiguió finalmente renovar la Gestora, manteniendo al frente de la misma al falangista moderado Francisco Nárdiz (hasta entonces vicepresidente y presidente en funciones desde hacía meses) y dando entrada a destacados *camisas viejas* (Manuel González-Mesones, Ángel Ruiz Arenado, Juan Antonio Vidal Abascal y Jesús Fiochi Gil), junto a dos militantes procedentes de la derecha conservadora (Francisco de Cáceres, director del periódico falangista *Alerta* y procedente del entorno de Acción Popular, y José Gómez Mazarrasa)¹⁸. En cuanto a las gestoras municipales, en poco más de un año renovó una treintena, que fueron invariablemente copadas por militantes falangistas¹⁹.

De esta manera entre 1940 y 1942 se produjo una importante renovación del personal político local, que pasó a estar formado casi por completo por hombres del partido, con un importante peso de los viejos falangistas y los excombatientes. El largo mandato de Joaquín Reguera Sevilla como gobernador civil (1942-1951) no hizo sino consolidar esta situación de hegemonía falangista, caracterizándose por una mayor estabilidad en las gestoras municipales. Contamos con datos mucho más completos sobre los cargos nombrados por Reguera entre 1943 y 1948, cuyos antecedentes políticos – predominantemente falangistas o conceptuados sin más como “de derechas” – mostramos en el cuadro 1. Los datos sobre alcaldes y gestores corroboran el control casi absoluto ejercido por FET-JONS sobre el poder político local en estos años, teniendo en cuenta que en la mayoría de los ayuntamientos todos sus componentes tenían el carné falangista y una tercera parte desempeñaban, o lo habían hecho, cargos en la organización. A eso se añade el relativamente elevado porcentaje de

¹⁸ Ambas propuestas en AGA, Gobernación, caja 2548. En la primera figuraban como gestores otros tres falangistas de antes de la guerra (Joaquín Martínez Fernández, el jefe local torrelaveguense Antonio Fernández Herrera y Enrique Pedraja del Río), junto a dos militantes procedentes de Acción Popular (el alcalde laredano Ángel Senderos y José Pombo Noriega). Respecto a los diputados nombrados en 1942, González-Mesones sería posteriormente alcalde de Santander, Ángel Ruiz Arenado era hermano del ex-jefe provincial Martín Ruiz Arenado y procurador en Cortes, Vidal Abascal era delegado provincial del Frente de Juventudes y Fiochi era hermano del antiguo escolta de Hedilla y ahora delegado provincial de Información e Investigación Ángel Fiochi. Cáceres, pese a dirigir *Alerta* y ocupar diversos cargos en FET-JONS, era básicamente un franquista conservador. Por su parte Gómez Mazarrasa, ligado a la conservadora Asociación Provincial de Ganaderos, fue cesado al poco por un falta grave.

¹⁹ Los datos sobre renovación de gestoras en AGA, DNP, cajas 66 y 100. Entre los nuevos alcaldes destaca por su significación el de Vega de Pas, Santiago Carral, un *hedillista* que había sido condenado en su día por los sucesos de abril de 1937.

falangistas de antes de la guerra, muy superior a los procedentes de otros partidos e incluso – en el caso de los alcaldes – mayor que el de los genéricamente considerados como “de derechas”. Existe una relativa presencia de elementos procedentes de Acción Popular (menor de lo que sería de esperar dada su gran fuerza antes de la guerra), mientras que es escasa la de los monárquicos de la Agrupación Regional Independiente y los tradicionalistas, y no aparecen antiguos republicanos de derecha.

Cuadro 1. Antecedentes políticos del personal político municipal, 1943-1948				
Procedencia / <i>relación con FET</i>	Nº alcaldes	%	Nº gestores	%
Falange Española de las JONS	27	29,3	124	21,7
“De derechas”	21	22,8	245	42,9
Sin antecedentes o datos	15	16,3	106	18,5
Acción Popular	10	10,8	39	6,8
“Simpatizantes” de FE-JONS	6	6,5	31	5,4
Comunión Tradicionalista	5	5,8	13	2,2
ARI, Renovación, Bloque Nacional	4	4,3	17	3,0
Acción Católica	2	2,3	16	2,9
Unión Patriótica, Somatén	1	1,1	3	0,5
Frente de Juventudes	-	-	6	1,0
<i>Afiliados a FET-JONS</i>	71	94,6	496	87,0
<i>Cargos en FET-JONS</i>	34	45,3	182	31,9

Hasta el momento la principal institución que se resistía al empuje falangista era el ayuntamiento santanderino, que había contado con el rechazo de FET-JONS desde un comienzo. Finalmente en marzo de 1944 se produjo una grave crisis política – que incluyó una agresión física entre el presidente de la Diputación Francisco Nárdiz y el alcalde Emilio Pino, ambos fulminantemente destituidos – que dio lugar a una renovación casi completa de la gestora²⁰. El nuevo consistorio fue conocido como el de “la invasión de Falange”, al quedar conformado exclusivamente por militantes del partido, con un fuerte peso de los viejos falangistas (en total ocho, un 42,1% del total, incluyendo al alcalde y a los hombres fuertes de la corporación), bajo la presidencia del presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana Alberto Abascal e incluyendo a varios representantes de la oligarquía local. Esta gestora tuvo una vida bastante agitada, siendo sustituida en 1946 por otra presidida por el falangista

²⁰ Las disputas por el control del ayuntamiento santanderino – en las que se entremezclaban factores políticos, económicos y urbanísticos (referidos a la reconstrucción de la ciudad tras el incendio de 1941)- y la crisis de 1944 están expuestos con detalle en nuestra tesis doctoral *El primer franquismo...*, en especial p. 209 y ss.

Manuel González-Mesones, igualmente controlada por Falange pero compuesta mayoritariamente por “hombres nuevos”, sin apenas trayectoria política previa.

Evidentemente la crisis desatada en marzo de 1944 alcanzó también a la Diputación Provincial, al resultar cesado su presidente, sustituido por el falangista Alejandro Rodríguez de Valcárcel, burgalés procedente del SEU y que llegaría a ser presidente del Consejo del Reino. En cualquier caso los diversos cambios producidos en la Gestora provincial con posterioridad no alteraron el control falangista de la misma, aunque el presidente desde 1947, el catedrático de instituto José Pérez Bustamante, fuese de un falangismo apenas nominal.

3. La farsa de la “democracia orgánica”. Continuidad y caracterización del “personal político” franquista a finales de los cuarenta.

Es bien sabido que la Ley de Bases de Régimen Local de 17-VII-1945 y su posterior puesta en práctica a partir de la celebración de las primeras “elecciones” municipales del franquismo en 1948 respondieron a una finalidad cosmética de la dictadura, que buscaba presentarse a sí misma como un régimen en cierta medida representativo y alejarse de sus antiguos aliados fascistas. Sin embargo las múltiples restricciones legales de la normativa promulgada y el funcionamiento falseado e intervenido de la maquinaria electoral hacían que las elecciones no pasasen de ser una farsa controlada y dirigida por las instituciones franquistas, con una participación crucial de Falange. En estas condiciones no es de extrañar que las elecciones de 1948 no supusieran demasiados cambios en el reparto del poder local y provincial, más allá de los entresijos del sistema de designación de concejales y diputados.

En Santander las elecciones apenas alteraron la composición del ayuntamiento, repitiendo doce de sus dieciocho concejales y continuando como alcalde González-Mesones, que de hecho lo fue nada menos que hasta 1967. Se mantenía el absoluto dominio de FET-JONS, creciendo algo la representación de la vieja guardia, así como el predominio de los profesionales y empresarios de clase media y alta, aparte de la entrada de dos obreros por el tercio sindical. En el resto de la provincia se produjo como era de esperar un rotundo éxito de las candidaturas oficiales, controladas por militantes falangistas. Los datos sobre antecedentes políticos de los concejales, ofrecidos en el cuadro 2, permiten comprobar que existe una cierta renovación, visible en el elevado número de “apolíticos”, término en cualquier caso engañoso, registrándose entre los demás un predominio de los conceptuados simplemente como

derechistas. Los datos enviados a la Delegación Nacional de Provincias indican una abrumadora mayoría de afiliados a FET-JONS entre los concejales electos (el 81,5%), mientras que un 85,4% de los mismos eran considerados de adhesión “absoluta”, siendo aún mayor el control del partido entre los alcaldes, todos salvo uno afiliados al mismo.

Cuadro 2. Elecciones municipales de 1948. Caracterización política de los electos				
<i>Relación con FET-JONS:</i>	Concejales	%	Alcaldes	%
Militantes	380	52,34	83	84,69
Adheridos	212	29,20	14	14,28
No afiliados	134	18,45	1	1,02
<i>Grado de adhesión:</i>				
A: Absoluta	620	85,39	93	94,89
B: Tibia	76	10,46	2	2,04
C: Escasa	30	4,13	3	3,06
<i>Antecedentes:</i>				
Falange Española	82	11,29	19	19,38
C. Tradicionalista	17	2,34	2	2,04
Monárquico/R.E.	8	1,10	2	2,04
Derecha	223	30,71	14	14,28
CEDA/Acción Popular	37	5,09	9	9,18
Repub. Derecha	9	1,24	0	-
Repub. Izquierda	6	0,82	0	-
UGT/PSOE	2	0,27	0	-
Org. católicas	7	0,96	1	1,02
F.J./SEU	2	0,27	1	1,02
Apolíticos	333	45,86	0	-
No calificados	0	-	50	51,02

Fuente: AGA, DNP, caja 200.

Los datos enviados a la Delegación Nacional de Provincias nos permiten también acercarnos a la cuestión de los apoyos sociales del franquismo en la región, a través de la caracterización socio-profesional de este personal político local (véase el cuadro 3). Estos apoyos no se limitaban a las clases acomodadas (clase alta, clase media pequeñoburguesa, propietarios agrarios), sino que se extendían al menos a una parte de las clases populares, especialmente por lo que hace al campesinado. La mayor parte de los alcaldes y concejales eran labradores y ganaderos, con una gran diversidad en sus niveles de ingresos o propiedades, algo por otro lado lógico dado el carácter predominantemente agropecuario de la gran mayoría de los municipios. Asimismo existe, como era de esperar, una evidente sobrerrepresentación de los sectores acomodados de la élite social local (propietarios,

abogados, médicos, etc.), en su mayoría personas de las denominadas “de orden”, evidentemente el sector más beneficiado por las políticas del régimen y que de manera más inequívoca le dio su apoyo. La clase media compuesta por empleados, pequeños industriales y comerciantes tenía igualmente una presencia importante, constituyendo la base de los poderes locales en las ciudades y villas de la provincia. Por último existía una presencia, aunque minoritaria, de obreros y jornaleros, lo que viene a confirmar que el apoyo a la dictadura estuvo bastante repartido y que, sobre todo en el campo, alcanzó un cierto carácter interclasista, explicable por el peso de los valores conservadores.

Profesiones:	Concejales	%	Alcaldes	%
Labradores, ganaderos	394	54,26	34	34,69
Industriales	93	12,81	13	13,26
Obreros	65	8,95	4	4,08
Propietarios	40	5,51	10	10,20
Comerciantes	27	3,71	4	4,08
Profesiones liberales	28	3,85	10	10,20
Empleados	22	3,03	11	11,22
Maestros	6	0,82	1	1,02
Otros	51	7,02	11	11,22
Total	726	100,00	98	100,00

Fuente: AGA, DNP, caja 200.

En la Diputación Provincial tampoco se produjo una alteración significativa del reparto del poder, aparte de la ampliación del número de miembros. La corporación surgida de la elección de 1949 estaba integrada exclusivamente por militantes de FET-JONS y trece de sus dieciséis miembros ocupaban cargos en la organización (en su mayoría como jefes locales), siendo en torno a la mitad de ellos *camisas viejas*, junto a tres antiguos cedistas, un upetista y un tradicionalista. Como presidente se mantenía José Pérez Bustamante, quien continuó en el cargo hasta 1961. En cuanto a la composición social de la nueva Diputación encontramos en ella varios propietarios, tres profesores, dos abogados de buena posición económica, dos farmacéuticos, dos empleados, un alto directivo de empresa, un periodista, un veterinario, un contratista, un maestro nacional, un funcionario municipal, y como excepción a la norma, un marinero. En suma, una hegemonía absoluta de profesionales de clase media y

media-alta, con una sorprendente ausencia de industriales, comerciantes y labradores o ganaderos acomodados (la falta de representación de obreros y campesinos era previsible).

4. Conclusiones:

El proyecto de restauración del orden social tradicional sostenido por los militares y políticos protagonistas de la sublevación golpista de julio de 1936 se tradujo con evidente claridad en la conformación de los poderes locales de la zona rebelde durante la guerra civil. En el caso de Cantabria este proyecto tuvo su plasmación en la sistemática reinstauración de las viejas élites en las instituciones locales y provinciales operada a partir de la conquista de la región en agosto de 1937. La Diputación Provincial quedó bajo el control de una serie de viejos políticos de inclinación monárquica y católica, representantes notorios de la alta burguesía montañesa, mientras que al frente de las gestoras municipales se colocaba a los tradicionales caciques derechistas, a los alcaldes de la dictadura primorriverista o del bienio radical-cedista y a los antiguos dirigentes de Acción Popular o la Regional Independiente.

Sin embargo, como resultado de la dinámica política que adquirió la construcción del *Nuevo Estado* franquista en sentido fascista (o al menos *fascistizado*), el creciente poder de Falange y el control adquirido en el partido por los propios falangistas, desde principios de la década de los cuarenta se produjo un reajuste del reparto del poder local que quedó básicamente culminado a mediados de la década. Impulsado por gobernadores civiles falangistas como Ruiz García y Romojaro, y consolidado por Reguera Sevilla, este proceso supuso un amplio desplazamiento de los representantes de la burguesía derechista y monárquica, sustituidos por jóvenes falangistas (fuesen *camisas viejas* o *nuevas*), pertenecientes mayoritariamente a la clase media, e incluso de los sectores populares en el caso del personal político municipal. Este relevo, no exento de algunas tensiones, nos parece exponente de un nuevo modo de selección de los cuadros políticos, muy centralizado y vinculado más a la fidelidad absoluta al régimen y al partido único que a la pertenencia a la élite socio-económica local. Surgió de esta manera una clase política hasta cierto punto renovada y que estaba nucleada por los hombres de Falange (lo que fue posible por la fuerza alcanzada por el partido en la región), en torno a la cual se agruparon en posición subordinada diversos elementos “derechistas” y de orden.

Por otra parte, el análisis del personal político permite confirmar la existencia de una considerable base de apoyo social a la dictadura, surgida sobre todo de las condiciones socio-culturales del campo montañés y de la movilización derechista de la República y la guerra. Esta base incluyó a la clase alta, a buena parte de las clases medias y del campesinado, e incluso a núcleos de las clases populares, definiéndose por su rechazo a la experiencia republicana y su identificación con ideas de orden, autoridad, continuidad social y religión.

En cualquier caso es importante resaltar que el nuevo contenido político, generacional y hasta cierto punto social del poder político no significó una alteración fundamental del sentido clasista y socialmente conservador del franquismo. Los intereses de la oligarquía económica quedaron básicamente garantizados, no sólo porque algunos de sus representantes (en especial los más jóvenes) estuvieron bien colocados en la nueva estructura de poder, sino porque la dictadura había nacido con la clara vocación de asegurar y reforzar el orden socio-económico tradicional amenazado por la democracia republicana, y Falange, pasado el radicalismo verbal de la primera época, no demostró en ningún momento intención de acometer una reforma sustancial del mismo, acomodándose a una política económica ultraconservadora y limitándose a puntuales mejoras que en poco compensaron el marcado retroceso de las condiciones de vida y trabajo de las clases populares en la posguerra.